

# Participación política en adultos mayores

Marcela Ávila-Eggleton<sup>1</sup>

Paulina Pereda Gutiérrez<sup>2</sup>

## Resumen

El envejecimiento poblacional, esto es, el incremento porcentual de la población de adultos mayores y la disminución porcentual de la población de jóvenes e infantes, constituye uno de los fenómenos demográficos más notables del siglo XXI. Si bien las personas adultas mayores han ganado representación poblacional, no ha sido proporcional su representación política, pues se trata de un grupo que estructural e históricamente se ha encontrado en situaciones de desventaja y relegado del quehacer público.

Este trabajo reconoce la necesidad de desarrollar y efectuar acciones afirmativas que permitan lograr un terreno paritario desde donde este grupo etario pueda partir y hacer valer sus derechos políticos. Sin embargo, se plantea que las medidas orientadas a mejorar sus condiciones de participación política, hasta ahora afincadas en un imaginario social denigrante y prejuicioso, ponen en marcha acciones asistencialistas que no resuelven las problemáticas de fondo. Por el contrario, se propone que las acciones y políticas en favor de sus derechos se formulen, implementen y evalúen con base en la consulta y en el diálogo con las personas adultas mayores, anteponiendo su dignidad, autonomía y experiencia.

## Introducción

---

<sup>1</sup> Doctora en Ciencia Política. Universidad Autónoma de Querétaro. [marcela.avilaeggleton@uaq.mx](mailto:marcela.avilaeggleton@uaq.mx)

<sup>2</sup> Maestra en Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Querétaro. [paulina.pereda@uaq.mx](mailto:paulina.pereda@uaq.mx)

El presente texto expone avances de una investigación en proceso sobre la participación política de las personas adultas mayores en el Estado de Querétaro. Este trabajo forma parte de un estudio extenso que actualmente se realiza en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro en coordinación con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y que integra, además de las personas adultas mayores, seis grupos de atención prioritaria: personas con discapacidad, comunidades afroamericanas, personas migrantes, indígenas, comunidad LGTBTTIQ+ y juventudes. La intención es adoptar medidas para mejorar las condiciones de participación política, representación y acceso a cargos públicos de grupos en condiciones de vulnerabilidad.

El contenido de este avance se divide en cinco apartados. En el primero de ellos “Planificar con base en los cambios demográficos del estado de Querétaro y del país”, se expone el cambio poblacional y el rápido incremento porcentual de la población de adultos mayores. Este espacio sirve de introducción para dar cuenta de la necesidad de ajustar y trabajar con orientación a involucrar en la sociedad, en la democracia y en la vida pública, a este segmento de la población.

El segundo apartado, “Elementos jurídicos y cambios a implementar en favor de la protección de los derechos políticos de las personas adultas mayores”, despliega un breve panorama en relación con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convenciones, leyes y políticas, con motivo de proteger los derechos humanos y políticos de las personas adultas mayores. Sin embargo, se verá, en la práctica el Estado se decanta por realizar acciones asistencialistas que pretenden, sin éxito, subsanar las vulnerabilidades y desigualdades en las condiciones sociales y económicas del grupo de sesenta y más. De igual forma, sobresale la ausencia de formación cívica y política orientada a las personas adultas mayores. La suma de estos factores resulta en la falta de asociación, la inexistencia de discursos políticos y el abandono de la vida pública.

El tercer componente expuesto, “Vulnerabilidad e imaginario del adulto mayor: condiciones que frenan la participación política-electoral”, pone énfasis en el imaginario que histórica y socialmente se ha construido alrededor de las personas adultas mayores, presentándoseles

como incapaces, vulnerables, desvalidas y dependientes. Este constructo, aunado a las dificultades económicas y físicas que el grupo etario afronta —y que se intensifican a mayor edad— frena su participación y el goce de sus derechos políticos, de manera que el voto se convierte en el principal y a veces único medio para intervenir en la vida política.

En el cuarto apartado se presentan algunos de los hallazgos de la investigación empírica que fue realizada con la finalidad de conocer, a través del diálogo, las necesidades, percepciones, costos de intervención y desincentivos que limitan la participación política de este grupo que requiere atención prioritaria. La intención de identificar y reconocer estas áreas de oportunidad es ofrecer información que sirva para el desarrollo, mejora e implementación de acciones afirmativas contundentes que favorezcan la participación política y el goce de los derechos políticos. Para ello, se realizaron entrevistas a profundidad y un focus group con personas mayores que nunca han ocupado un cargo público, cuya participación política es escasa o nula y que son habitantes de Querétaro, Corregidora, El Marqués, San Juan del Río o Pedro Escobedo, cinco de los municipios que concentran la mayor cantidad de personas mayores en el estado, y que abarcan zonas urbanas, rurales y mixtas.

En la última parte se presentan las conclusiones y reflexiones del análisis, pretendiendo abonar a la formulación de acciones afirmativas y otras políticas que motiven y faciliten la participación de las personas adultas mayores en Querétaro.

## **I. Planificar con base en los cambios demográficos del estado de Querétaro y del país.**

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), al año 2020<sup>3</sup> las personas de sesenta años y más constituían el 10.1% de la población total del estado de Querétaro, esto es un 2.6% más que al año 2010<sup>4</sup>. En los mismos diez años, el grupo de edad en la entidad creció un 76%.

---

<sup>3</sup> La población de sesenta y más en la entidad queretana al año 2020 fue de 240 mil 222 habitantes (INEGI, 2010)

<sup>4</sup> La población de sesenta y más en la entidad queretana al año 2010 fue de 136 mil 381 habitantes (INEGI, 2010)

Esta tendencia se presenta también a nivel nacional, pues se estima que en el año 2050 este grupo de edad represente al 25% de la población total en México. Dicho fenómeno no solamente es muestra de una mayor esperanza de vida, sino que expresa un envejecimiento de la población mexicana: el aumento en proporción de las personas adultas mayores en relación con la disminución de infancias y juventudes (Kánter, 2021). Esto se refleja, por ejemplo, en la edad mediana. En el caso de la Ciudad de México, la entidad más envejecida del país, la edad mediana es de 35 años (Kánter, 2021). En Querétaro, al contrastar los censos de INEGI, se puede apreciar un aumento gradual de la edad mediana: 21 años en el 2000, 25 años en el 2010, y 29 años en el 2020. Según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), en el año 2050 la edad mediana en la entidad será de 39 años.

Si bien, actualmente el estado de Querétaro reúne aproximadamente al 1.6% del total de personas mayores en México, existen municipios con alta densidad de habitantes de sesenta años y más. Tal es el caso de la ciudad de Querétaro<sup>5</sup>, donde el 46.6% de su población total pertenece al grupo etario; esta característica demográfica le coloca en el lugar número 17 a nivel nacional de los municipios —alcaldías, en la CDMX— con mayor cantidad de adultos mayores (Kánter, 2021).

El fenómeno de envejecimiento es indicador de que existen condiciones favorables que han permitido a las personas extender su vida. Sin embargo, resulta ser también una realidad inquietante, pues implica preparación, conocimiento y recursos, y porque demanda la capacidad del Estado de procurar las condiciones necesarias en beneficio de una sociedad que se está transformando demográficamente y cuyos miembros tienen los mismos derechos de participar e intervenir en lo público. La edad es un factor importante al pensar en democracia y, por lo tanto, es obligatorio repensar los mecanismos de participación —desde el voto y más allá del voto— con base en las especificidades de cada grupo etario.

---

<sup>5</sup> De acuerdo con INEGI (2020a), al año 2020 en el municipio de Querétaro habitaban 111,790 personas adultas mayores, el cual alberga a un 46.6% de la población total de este grupo de edad en el estado. Posteriormente, las alcaldías en donde habitan más adultos mayores en el estado son: San Juan del Río (12.5%), Corregidora (9.7%), El Marqués (6.3%), Tequisquiapan (3.5%) y Pedro Escobedo (2.8%).

Ante la realidad que se presenta, el Estado debe garantizar que se brindará atención prioritaria a este segmento y que implementará acciones afirmativas que respalden sus derechos políticos. No obstante, es usual que los esfuerzos implementados recaigan en visiones paternalistas y en dinámicas proteccionistas y condescendientes que no privilegian la dignidad humana, pues no reconocen la autonomía e independencia de los adultos mayores.

En este orden de ideas, algunos autores ya han planteado la necesidad de construir una agenda gerontológica para la democracia mexicana, bajo el argumento de que se requieren ajustes en normas, políticas y acciones afirmativas que promuevan y garanticen la participación política-electoral de las personas adultas mayores (Vado, 2020). Los ajustes y medidas implementados deberán tener como base el conocimiento de que existe un riesgo de vulnerabilidad que se intensifica con la edad. Asimismo, no deberá prescindirse de la consulta para conocer las percepciones, necesidades y particularidades de este grupo etario que además resulta ser sumamente diverso y heterogéneo.

## **II. Elementos jurídicos y cambios a implementar en favor de la protección de los derechos políticos de los adultos mayores.**

Pese a que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) establecen derechos políticos y se pronuncian por la igualdad ante la ley, la no discriminación y la igual protección para toda la ciudadanía, existen conjuntos de personas que por sus características particulares se han encontrado estructural e históricamente relegados del quehacer público y en situaciones de desventaja. Es por ello que dichos grupos requieren atención prioritaria y la implementación de acciones afirmativas para que sus experiencias sean tomadas en cuenta y se nivele el terreno, en concordancia con otros grupos, para el cumplimiento de sus derechos.

Como se ha dicho, año con año el grupo de adultos mayores va ganando representación poblacional, pero no así representación política. Ante esta tendencia es ineludible la construcción de espacios incluyentes, paritarios, libres de discriminación, vinculantes y

planeados a la medida de sus necesidades. En un modelo de democracia representativa es apremiante el tema de diversidad en el ejercicio político, pues los gobernantes deberán, al momento de tomar decisiones que incidan en la vida de sus representados, reconocer y personificar al conjunto total de la población.

En dicho tenor, y con base en la tendencia demográfica que se expone, el Estado mexicano tiene que encarar y adaptar sus normas e instituciones hacia una sociedad envejecida. De esta forma, cuidar desviarse del proceso de desciudadanización<sup>6</sup> del que Klein & Ávila-Eggleton (2015) advierten cuando señalan que a mayor edad es más probable que las personas se desarticulen de la sociedad y se vulneren sus derechos.

Algunos expertos han manifestado que la problemática alrededor de la protección de los derechos de las personas adultas mayores no radica en un tema jurídico, pues existen diversos pactos que han sido aprobados nacionalmente. No obstante, es notorio que existen vacíos que pueden arreglarse para reforzar el tema de derechos. Por ejemplo, la CPEUM no posee un apartado que se pronuncie por los derechos político-electorales de las personas adultas mayores, pero sí lo hay para las comunidades indígenas en particular. Es importante que el Estado mexicano sea explícito y se manifieste de manera específica para el grupo de las personas adultas mayores.

Aunado a ello, existen otros asuntos y tratados pendientes para México de cara a la protección de los derechos del grupo de sesenta y más. Tal es el caso de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, iniciativa de la OEA, cuyo objetivo es la promoción, protección y reconocimiento de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas adultas mayores, buscando lograr su inclusión y participación en la sociedad (Muñoz- Pogossian & Siegel, 2019).

---

<sup>6</sup> Para Klein & Ávila-Eggleton (2015) el concepto de ciudadanía históricamente se ha asociado a privilegios que se acceden al pertenecer a una comunidad política. No obstante, sostienen, el concepto posee vínculo con la participación política en términos generales, pues es un elemento que caracteriza a las democracias representativas. Asimismo, indican que contar con derechos sociales es esencial para hablar de una ciudadanía completa.

La iniciativa de la OEA protege sus derechos humanos y vela, entre otras cosas, por la igualdad y la no discriminación, por la dignidad e independencia y por la libertad de expresión y opinión. Así, la OEA busca salvaguardar derechos políticos, culturales, de trabajo, de justicia y de educación, por mencionar algunos. Los países participantes, por lo tanto, adoptan medidas para sancionar prácticas contrarias a lo antes señalado, asimismo, se comprometen a realizar ajustes que favorezcan el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores (Muñoz- Pogossian & Siegel, 2019); sin embargo, México no participa.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN), se ha enfocado en los derechos humanos de las personas adultas mayores, pronunciándose por su no discriminación y por la adopción de políticas públicas con base en sus especificidades (Calero, n.d.). Si bien, el trabajo realizado por la SCJN suma a la visibilización de las problemáticas específicas del grupo etario y a la construcción de herramientas, como lo señala Calero (n.d), que permitan hacer frente a nuevos retos, falta brindar atención a otras áreas. Ejemplo de ello es la consulta para la elaboración de leyes; esta iniciativa se ha llevado a la práctica para personas de comunidades indígenas (Ramírez-Espinoza & Cerqueira, 2020) y para personas con espectro autista o con alguna discapacidad en general. En este último grupo comúnmente se inserta a las personas adultas mayores, mas no se refiere a ellas de forma particular; si bien es cierto que con la edad se incrementa la probabilidad de tener alguna condición incapacitante, no todas las personas adultas mayores tienen discapacidad. En Querétaro, el 80% de las personas adultas mayores no presenta ningún tipo de discapacidad (INEGI, 2020a).

Es imperativo que México dirija esfuerzos hacia un cambio en el diseño de políticas y prácticas, y que fortalezca su marco jurídico en la misma dirección. Asimismo, que los derechos políticos se emparejen con otros derechos, pues en muchos casos existen las leyes, pero no las condiciones para hacerlas efectivas. Por ello, es igualmente indispensable que el Estado se prepare para proveer infraestructura y apoyo en salud y en lo económico a este grupo.

- a. *Acciones asistencialistas como tendencia para abordar la vulnerabilidad de los adultos mayores.*

México se ha decantado por acciones asistencialistas que pretenden subsanar las vulnerabilidades y desigualdades que abundan al hablar de las condiciones sociales y económicas del grupo de sesenta y más. Tal es el caso de los apoyos permanentes y las pensiones por discapacidad que establece la CPEUM. En el estado de Querétaro y en el resto del país, a partir de los 68 años<sup>7</sup> las personas pueden recibir un apoyo económico federal bimestral (Secretaría de Bienestar, n.d.). En 2019 el Gobierno Federal duplicó el monto de la pensión y, pese a ello, continúa estando por debajo de la línea de pobreza por ingresos (Coneval, 2020b).

En Querétaro, las personas de 65 años y más, o con discapacidades permanentes, o en condiciones marginales, reciben apoyos alimentarios en especie que otorga la Secretaría de Desarrollo Social estatal. El argumento de dicha iniciativa es mejorar la calidad de vida de la población queretana a través de su alimentación. Sin embargo, acciones como estas, asistencialistas, suelen derivar en la percepción de un gobierno paternalista y en actitudes clientelares.

En el municipio de Querétaro, en donde la población de adultos mayores a 2020 asciende a un 46.6%, se han implementado proyectos que sí apelan a la participación plural y democrática, tal es el caso de los Consejos Temáticos de Participación Ciudadana. No obstante, hasta ahora, no se integra a las personas adultas mayores; los asuntos en torno a este grupo etario se abordan en los Consejos Temáticos de Familia, Mujeres, Educación y Urbanismo (Municipio de Querétaro, n.d.). Esto demuestra la tendencia a atender temas sobre personas adultas mayores desde la perspectiva de personas que no pertenecen al grupo etario.

Así, la ausencia de representación y presencia de personas adultas mayores en iniciativas que involucren la consulta ciudadana y la participación, en conjunto con programas que privilegian el asistencialismo, dificultan la construcción de una autopercepción favorable que permita a las y los individuos incidir activamente en la vida política.

---

<sup>7</sup> Este apoyo se entrega a partir de los 65 años a las personas que habitan en municipios integrantes de pueblos indígenas (Secretaría de Bienestar, n.d.)



### *b. Envejecimiento activo y formación cívica.*

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el envejecimiento activo como “proceso de optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen” (2002, p.79). El concepto supone que los individuos encuentren apertura, un ambiente protegido y asistencia para participar en sociedad. Con base en ello, se sugiere que los programas e iniciativas implementadas en favor del envejecimiento activo promuevan la participación política.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro se ha ocupado en desarrollar programas y espacios que ofrecen talleres, comedor, capacitación, servicios médicos y cursos. Estos espacios tienen como argumento reconocer el papel del adulto mayor dentro de la sociedad, fortalecer sus capacidades, dignificar la vejez y garantizar sus derechos humanos (Sistema DIF Querétaro, 2021). Sin embargo, no brindan educación cívica, ni fomentan la asociación, ni el discurso político en las personas adultas mayores.

No cabe duda que en materia de participación política-electoral, en el ámbito de las personas adultas mayores, hay un largo camino que recorrer. La OMS (2002) señala que mantener la autonomía y la independencia a medida que se envejece debe ser el objetivo principal tanto de las y los individuos receptores como de quienes son responsables políticos. Por lo tanto, planificar con base en la perspectiva de envejecimiento activo es fundamental para el diseño de políticas y programas públicos enfocados a esta parte importante de la sociedad.

### **III. Vulnerabilidad e imaginario de las personas adultas mayores: condiciones que frenan la participación política-electoral**

Existe un imaginario social en torno a las personas adultas mayores con base en el cual se les estereotipa como personas incapacitadas, frágiles y dependientes. Esto se basa en prejuicios sobre su apariencia y sus capacidades y llega a resultar en el ostracismo.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) de Conapred (2017), reporta que el 18.3% de las personas adultas mayores encuestadas señaló haber sido víctima de alguna

forma de discriminación en el último año. Entre ellos, el 61% indicó que el acto de discriminación estuvo relacionado con su edad. La misma fuente apunta que el 44.9% de los encuestados de este grupo percibe que sus derechos no son respetados y el 66.8% percibe que su experiencia suele ser subestimada y poco valorada.

Los prejuicios denigran a las personas adultas mayores, afectan su autoestima, violan sus derechos humanos e impiden identificar, de manera certera, sus necesidades a partir de las particularidades de este grupo tan diverso. Se suele clasificar a todo el universo de personas adultas mayores como “personas vulnerables”, una etiqueta sin matices desde donde la política designa iniciativas asistencialistas que los desciudadaniza e infantiliza; dificultando su empoderamiento y haciendo imposible el cambio de imaginario a uno que los posicione como personas dignas, productivas, con capacidad de decisión (Klein & Ávila-Eggleton, 2015).

Klein (En Perspectiva, 2021) indica que existe un desplazamiento generacional que explica por qué en tiempos actuales las personas de sesenta años disponen de las condiciones de calidad de vida que hace seis décadas poseía una persona de cuarenta años. En este sentido, es común que muchas personas adultas mayores viajen, emprendan una profesión e inicien una vida en pareja. Visibilizar esto, permite romper con el estereotipo predominante de decrepitud (*idem.*).

No obstante, hay que considerar que el ingreso es un factor condicionante del bienestar, oportunidades y del estilo de vida de las personas adultas mayores y, en México, buena parte del grupo etario se encuentra en situación de vulnerabilidad financiera. Con datos de Conapred (2017) se sabe que solo el 39% realiza alguna actividad económica remunerada, en donde el 84.4% no tiene contrato por escrito, el 83.8% no tiene derecho a incapacidad con goce de sueldo, el 81.6% no tiene acceso a servicios públicos de salud y el 42.2% gana dos salarios mínimos mensuales. Otras fuentes de ingreso<sup>8</sup> predominantes son los apoyos económicos brindados por algún familiar (40.4%), programas para adultos mayores (19%) y pensiones (28.15) (*idem.*). En el caso de Querétaro, de acuerdo con Coneval (2020a), el

---

<sup>8</sup> Cada encuestado puede tener una o más fuentes de ingreso.

31.6% de las personas de 65<sup>9</sup> y más, son pobres; esto es 4.4 puntos más pobres que las personas menores de 65 años.

Pese a los informes de pobreza mencionados, no hay que perder de vista que el grupo de adultos mayores es sumamente heterogéneo porque las circunstancias en las que se encuentran sus miembros no son homogéneas. No obstante, sí hay relación entre la edad y el incremento de dificultades sociales y económicas, asimismo, aumenta el riesgo a ser discriminado. Por ello, es vital identificar la pluralidad de factores de vulnerabilidad que existen, de manera que sea posible lograr políticas efectivas, cuya base sean las particularidades del grupo y que permitan su participación, consulta e integración a la sociedad con un trato digno.

*a. El voto: la principal forma de participación política.*

Klein & Ávila-Eggleton (2015) encuentran que en contraposición con los factores sociales, políticos y culturales que los excluyen y llegan a descuidarlos, los adultos mayores conservan una alta participación electoral y señalan que, mientras su peso electoral aumenta, el Estado ha sido incapaz de asegurar sus derechos sociales.

Al 2022, el grupo de personas de sesenta y más constituye el 18% de la distribución en el listado nominal (INE, 2022), en contraste con el año 2014 en donde equivalía al 14% (INE, 2019). En Querétaro, la participación del grupo de edad en el proceso electoral federal de 2018 fue de 65.8%. Sin embargo, la participación decrece de forma evidente a partir de los 85 años ya que, en el mismo periodo, las personas mayores de dicha edad tuvieron una participación electoral de 37.2%. Si de los datos del INE (2019) únicamente se retoma el rango de edad —de los 60 a los 84 años— la participación ciudadana de las personas adultas mayores en Querétaro en dicho proceso electoral sería de 71.52%.

Recuperando a Blais, Klein & Ávila-Eggleton (2015) exponen que un motivo por el cual las personas no votan es porque no cuentan con los recursos materiales o cognitivos para hacerlo. Posiblemente esto explica por qué hay una caída en la emisión del voto a partir de los 80 años

---

<sup>9</sup> Para Coneval el grupo de adultos mayores es la población de 65 años y más, ya que la ley del seguro social establece el derecho a pensión por vejez a partir de esa edad.

de edad que se intensifica después de los 85. Cuando Vado (2020) propone la creación de una agenda gerontológica de la democracia mexicana, precisamente lo hace expresando la necesidad de realizar acciones afirmativas para que las personas continúen votando durante toda su vida y sugiere mecanismos como el sufragio postal o urnas itinerantes; mismos que deberán realizarse partiendo de la escucha de las personas adultas mayores y no de suposiciones o estereotipos.

Como se ha visto, el grupo etario adquiere mucha relevancia durante las elecciones, por lo que el Estado debería procurar sus derechos civiles y sociales, más allá de aquellos que sirven para cubrir sus carencias y déficits, y enfocarse también en promover su autonomía, productividad y ciudadanía política. Es decir, gestionar su incidencia en la toma de decisiones en políticas públicas y reconocerlo como actor político (Klein & Ávila-Eggleton, 2015). No hay que olvidar que la ciudadanía activa y el proceso democrático no consisten solamente en el ejercicio del voto. Lamentablemente, la investigación realizada arroja que las personas adultas mayores no cuentan con las condiciones apropiadas, ni encuentran la motivación para participar de otra forma. En esto se abundará a continuación.

#### **IV. Acercamiento al grupo de atención prioritaria (GAP) en Querétaro, a fin de identificar áreas de oportunidad que ayuden a definir acciones afirmativas para su participación política-electoral.**

Para romper el estereotipo formado social e históricamente de la persona adulta mayor desvalida, dependiente e incapaz, son fundamentales el acercamiento, la escucha y el diálogo, dirigidos a la protección de sus derechos y a su participación activa. Con esta idea en mente, se realizó una aproximación a mujeres y hombres de 60 años y más, que nunca han ocupado un cargo público y que son habitantes de los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués, San Juan del Río y Pedro Escobedo, municipios que concentran la mayor cantidad de población de adultos mayores en el estado<sup>10</sup>. A través de entrevistas y un grupo focal, se conversó con personas adultas mayores sobre sus roles y dinámicas familiares, necesidades, actividades y fuentes de ingreso, y sobre sus experiencias y formas de participación política.

---

<sup>10</sup> De acuerdo con INEGI (2020), estos cinco municipios concentran el 78.92% de la población del estado de Querétaro y, por consiguiente, la mayor proporción de personas adultas mayores.

Como se ha señalado, la participación político-electoral de las personas adultas mayores, en la gran mayoría de los casos, se limita al voto. Por ello, durante el acercamiento al GAP se profundizó en los motivos por los cuales este grupo mantiene una alta participación electoral a través del voto, pero no tiende a involucrarse de otra forma en la vida pública y política. El diálogo resalta que las y los entrevistados perciben que los costos que implica el proceso para ir a votar son razonables. Desde obtener y actualizar su INE hasta presentarse a votar el día de las elecciones, las personas entrevistadas manifestaron tener buena apreciación de la atención, trato y acompañamiento recibido al realizar dichas tareas. No obstante, se identificaron algunos inconvenientes que pueden enmendarse para mejorar la experiencia de las y los votantes mayores.

Algunas personas, sobre todo quienes rebasan los 80 años de edad y aquellos con algún tipo de discapacidad física, indican que requieren ser asistidos por algún familiar o persona joven en el día de las elecciones. Igualmente, señalan que contar con apoyo de transporte especial gratuito desde su domicilio y hasta las casillas, les facilitaría en gran medida la labor. Esto ocurre especialmente en la comunidad rural de San Fandila, en Pedro Escobedo, donde los participantes del grupo focal hicieron constante hincapié en sus problemas de movilidad y en el mal estado de sus calles.

De igual forma, las personas entrevistadas encuentran que los lugares destinados para colocar las casillas suelen ser escuelas de educación básica. Al tratarse de espacios diseñados para infancias y juventudes, no están equipados con infraestructura pensada en personas de edad avanzada que disminuya la probabilidad de tener algún accidente. También dijeron necesario contar con espacios de estacionamiento especiales y más cercanos a las casillas, pues para muchos de ellos su condición física les dificulta caminar.

Estos puntos posiblemente ayuden a comprender por qué a partir de los 85 años aumenta considerablemente el abstencionismo electoral; las estadísticas de las elecciones de 2018 indican que hay una diferencia negativa de 34.3 puntos en la participación ciudadana del grupo de 85 años y más, frente al grupo de edad de 60 a 84 años.

*a. Costos de participación.*

En el país prevalecen condiciones sociales, culturales y económicas que son desfavorables, que limitan la participación política y que se acentúan a mayor edad. Méndez (2020) señala que la participación tiende a ser desigual en muchos contextos, dado que participar es costoso en tiempo, dinero y esfuerzo; además, requiere de cierta preparación para proponer y decidir soluciones a los problemas. A excepción del voto, las y los entrevistados hallan altos costos en participar en lo público y en lo político; un porcentaje significativo de personas adultas mayores en México sufre de vulnerabilidad económica y tiene, como fuente principal de ingreso, pensiones, apoyos de gobierno o soporte económico de familiares. Igualmente, algunos miembros del grupo etario carecen de condiciones físicas que les permitan desempeñarse con facilidad.

La totalidad de las y los informantes para esta investigación dijo recibir algún tipo de apoyo, ya sea de familiares, estar inscritos a programas públicos, apoyo bienestar, o ser beneficiarios de apoyos alimentarios. También expresaron padecer alguna enfermedad habitual, dolencias, haberse sometido a tratamientos o cirugías en años recientes. Por lo tanto, señalaron no asistir a mítines, foros de participación ciudadana, espacios de opinión o informes de gobierno, pues consideran caro o difícil desplazarse. Estos motivos también explican por qué no acuden a instancias municipales a levantar denuncias o quejas por fallas en servicios públicos u otras inconformidades. Asimismo, argumentaron que otra razón para no participar es porque sus vecinos, amigos o familiares tampoco lo hacen, o porque encuentran que quienes sí participan y acuden a llevar sus propuestas —por ejemplo, a centros de atención municipales— son ignorados y sus problemas no son resueltos.

El listado de costos no se limita a lo anterior, existen otra clase de desincentivos que podrían denominarse costos sociales. En opinión de algunas personas entrevistadas, siempre hay puntos discordes que derivan en problemas con los miembros de la comunidad y por lo cuál es complicado asociarse o dar buenos resultados. De igual modo, opinan que suele ser mejor quedarse callados, no involucrarse en cuestiones políticas, ni en asuntos públicos, para no ser señalados.

*b. Más desincentivos: desconfianza y falta de condiciones que faciliten la participación.*

Las razones que las y los entrevistados ofrecen para explicar por qué su participación política se limita al voto, siguen aumentando. Se detectaron causas profundas y complejas que han sido forjadas durante años, que tienen que ver con un descontento político, con la desconfianza hacia el gobierno y autoridades, así como con una percepción de injusticia generalizada. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) (INEGI, 2020b), el 33.8% de las personas adultas mayores considera que en México el gobierno toma en cuenta sus opiniones para la toma de decisiones y sólo el 20% dijo sentirse muy satisfecho con la democracia que se tiene en México. La misma fuente detalla que el 63.6% declaró interesarse o preocuparse por los asuntos del país y, de ese porcentaje, el 54.9% opinó que la corrupción es el principal problema al que se enfrenta México.

Las y los informantes para esta investigación señalaron que no existe transparencia al otorgar apoyos de gobierno. Esto conduce a que quienes no fueron beneficiados refuercen una actitud de desconfianza al notar que se suele dar prioridad a familiares, amigos y conocidos de las personas encargadas de los apoyos. Al no tener certeza sobre cómo se toman las decisiones, colateralmente se disuade a las personas de intervenir en actividades políticas para hacer solicitudes y manifestar requerimientos. La desconfianza es un tema crucial para explicar por qué las personas no participan política y electoralmente. Algunas personas entrevistadas argumentaron que no les gustaría que se les relacione con la política, pues perciben que se trata de una actividad en donde frecuentemente se incurre en actos deshonestos.

Por otro lado, las y los informantes de recursos más escasos manifestaron no contar con las condiciones necesarias para involucrarse en asuntos públicos. Tal es el caso de quienes habitan en San Fandila, Pedro Escobedo, para quienes es urgente contar con infraestructura social de calidad que ayude a satisfacer sus necesidades básicas. El diálogo con el grupo de personas adultas mayores de la comunidad permite ver que existen causas profundas, como el deficiente sistema de salud, el rezago alimentario, problemas de movilidad y la mala calidad en calles y avenidas, que resultan en una población que no está sana y que, además,

no puede trasladarse de forma eficiente; situaciones que restringen su participación en asuntos públicos.

De acuerdo con ENCUCI (INEGI, 2020b), gran porcentaje de la población de adultos mayores ha tenido problemas de infraestructura (63.1%), seguridad (50.9%) y de acceso a centros de salud públicos (30.8%). Dichas cifras ayudan a inferir que los problemas de infraestructura, salud y seguridad se convierten en obstáculos que dificultan sumarse y tomar acción en cuestiones político-electorales.

La diversidad del grupo de edad en cuanto a sus condiciones sociales, de salud y económicas, se convierte en respuestas heterogéneas en torno a justificar su baja participación política, pues la percepción respecto a los costos de participación no es igual en todos los casos. Precisamente por ello, debe tomarse en cuenta la diversidad del grupo al formular acciones afirmativas a la medida de sus necesidades.

*c. Percepción sobre representación política.*

La ENCUCI (INEGI, 2020b) registra que para el 30.6% de las personas adultas mayores encuestadas, el presidente de la República representa mejor sus intereses, el 16.3% percibe que los representa mejor la persona que ocupa la presidencia municipal y, únicamente el 10.3%, dijo sentirse mejor representado por quien ocupa la gubernatura del estado. El 29.1% de las y los encuestados opinó que las leyes se elaboran con base en los intereses individuales de las y los legisladores, mientras que solamente el 16.2% percibe que las leyes se elaboran con base en los intereses de la población.

Las cifras de ENCUCI son desalentadoras, porque reflejan el descontento político, la desconfianza y la falta de credibilidad que permiten explicar la baja participación de las personas adultas mayores en lo político. Los datos estadísticos evidencian que el grupo etario no se siente representado por las y los políticos; a pesar de ello, y con base en el diálogo y acercamiento empírico, no hay evidencia de que con frecuencia se emitan votos por castigo. Es decir, su elección no suele cambiar producto de su inconformidad con el trabajo realizado por el partido que anteriormente eligieron.



Para este grupo de edad, la familia parece ser la fuente principal de enseñanza cívica. En casi todos los casos las personas entrevistadas manifestaron que toda su vida han votado por el mismo partido que sus padres. La mayoría expresó que su motivación al votar es apoyar al partido político de su predilección; sólo algunas personas afirmaron haber emitido voto por castigo o haber ratificado su voto por un partido con base en su desempeño.

Partiendo de lo anterior, parece que las y los entrevistados no eligen a sus gobernantes tras haber evaluado la oferta política, gestiones anteriores o propuestas de campaña. Más bien lo hacen desde una sólida predisposición y en función de creencias arraigadas que revelan su desencanto político; algunas personas entrevistadas señalaron que, sin importar por quien se vote, las acciones realizadas por las y los políticos al llegar al poder tienden a ser asistencialistas y orientadas a no resolver las problemáticas de fondo.

Con informes de Conapred (2017), únicamente el 24% de la población adulta mayor encuestada dijo que rechazaría la elección para la presidencia de la República de un miembro de su grupo de edad. Al contrario, la mayoría de las y los entrevistados en los municipios señalados expresó que un gobernante de su edad no necesariamente personifica sus intereses, incluso manifestaron que no lo prefieren, argumentando que una persona más joven tendrá más fuerza y energía para trabajar. Empero, varios informantes apuntaron que, por experiencia, una persona adulta mayor puede desempeñar un rol de consejero o consultor. Esto en contraste con los datos de ENCUCI (INEGI, 2020b), donde únicamente el 23.3% de los miembros del grupo de edad encuestados consideró que poseen conocimientos y habilidades para participar en actividades políticas.

### **Conclusiones.**

A lo largo de estas líneas se ha expuesto la necesidad de garantizar el cumplimiento de los derechos políticos de las personas adultas mayores, un segmento de la población que incrementa conforme pasan los años y que, por su participación a través del voto, adquiere gran relevancia en las elecciones. Sin embargo, este grupo ha enfrentado, históricamente, condiciones de vulnerabilidad y de desventaja, por lo que su participación política —en la

mayoría de los casos— se limita al voto. El contexto en el que se ven inmersas las personas adultas mayores demanda la modificación de leyes y la creación de pactos en favor de sus derechos pero, más allá de ello, es obligatorio mejorar sus condiciones de vida para el ejercicio de sus derechos.

El grupo de personas adultas mayores requiere de atención prioritaria que repare en su diversidad y heterogeneidad. Hay que notar que sus miembros no se encuentran en las mismas condiciones, por lo tanto, es preciso que el trabajo que se emprenda no se base en suposiciones generales y en estereotipos basados en un imaginario social discriminatorio que debe caducar. Las personas adultas mayores son un grupo expuesto a factores de vulnerabilidad y esto es así porque con la edad aumentan los riesgos de padecer condiciones incapacitantes, tanto físicas como económicas. Por ello, es imprescindible indagar profundamente y conocer cada una de las variables que pueden poner en riesgo a este conjunto de personas; asimismo, cuáles son aquellas que limitan su intervención en asuntos públicos.

El acercamiento realizado para esta investigación arroja luz hacia la diversidad de factores que las y los participantes manifiestan al explicar por qué permanecen alejados de la vida pública. La desconfianza hacia el gobierno y sus representantes, el desencanto político y una serie de costos relacionados principalmente con movilidad y con vulnerabilidad financiera, son algunos de los puntos más destacados. No obstante, a la lista se añaden otros puntos importantes asociados con una cultura política afianzada a lo largo de su vida y basada en experiencias discriminatorias acumuladas y actitudes clientelares.

Pese a la aplicación de acciones afirmativas basadas en lo antes dicho para nivelar el terreno de los derechos políticos del grupo etario, estas no serán suficientes si se pretende continuar atacando al problema desde la superficie. Los derechos políticos deben ser proporcionales a otros derechos humanos; esto significa que hace falta fortalecer no solo a las instituciones electorales, sino también a todas las demás instituciones que conforman y dan soporte al Estado. Las personas adultas mayores no pueden tener como prioridad exigir y ejercer sus

derechos políticos e incidir en la vida pública, si sus necesidades de alimentación, salud y movilidad —por mencionar algunas— no están siendo atendidas.

Es preciso transformar el modo en que se observa al adulto mayor, incluso las formas de comunicación con el grupo; existe evidencia que sostiene que las personas adultas mayores no se identifican con el estereotipo de ancianidad y decrepitud. Los programas públicos, como se ha insistido, tienen primordialmente una disposición a realizar acciones asistencialistas y son pocos los que se orientan a ofrecer activaciones físicas, talleres culturales y oficios. Sin duda, estos últimos suman a su autovaloración, autoestima y vejez activa, pero hace falta complementar estos espacios con labores de formación en cultura democrática y cívica, incluso promover la asociación, la cooperación y la solidaridad.

El desencanto político, particularmente, se arraiga en la desconfianza e incredulidad, incluso en cierta percepción de malicia. Se precisa que los programas e iniciativas públicas sean transparentes y que, desde su planeación y desarrollo, hasta su implementación y evaluación, recurran expresamente a la consulta, al diálogo y a la escucha de las y los beneficiarios.

No hay que olvidar que las acciones afirmativas son estrategias temporales que buscan compensar desigualdades, por lo que su efectividad depende de si éstas forman parte o no, de un plan integral que contenga otras políticas públicas y una visión a futuro.

## **Bibliografía.**

Calero, Natalia. n.d. “Sobre los derechos humanos de las personas mayores”, Suprema Corte de Justicia de la Nación. [Consultado 12 de mayo de 2022] Disponible en:

[https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/derechos\\_humanos/articulosdh/documentos/2016-12/PERSONAS%20MAYORES.pdf](https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/derechos_humanos/articulosdh/documentos/2016-12/PERSONAS%20MAYORES.pdf)

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 2020a. Informe de pobreza y evaluación 2020 Querétaro. Disponible en:

[https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes\\_de\\_pobreza\\_y\\_evaluacion\\_2020\\_Documentos/Informe\\_Queretaro\\_2020.pdf](https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes_de_pobreza_y_evaluacion_2020_Documentos/Informe_Queretaro_2020.pdf)

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 2020b. Pobreza y personas mayores en México. Disponible en:

[https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza\\_y\\_poblacion\\_mayor\\_Mexico.pdf](https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_y_poblacion_mayor_Mexico.pdf)

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). 2017. “Resultados sobre personas mayores”. Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 2017. Disponible en:

[http://www.conapred.org.mx/documentos\\_cedoc/ENADIS\\_Resultados\\_PM\\_web\\_Ax.pdf](http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/ENADIS_Resultados_PM_web_Ax.pdf)

Consejo Nacional de Población (Conapo) 2018. Colección proyecciones de la población de México y las entidades federativas 2016-2050. Disponible en:

[http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Cuadernillos/22\\_Queretaro/22\\_QUE.pdf](http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Cuadernillos/22_Queretaro/22_QUE.pdf)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 5 de febrero de 1917 México.

En Perspectiva. 2021. “Nueva Vejez” en siglo XXI: falta una política más allá de la reforma jubilatoria, dice experto. [YouTube]. 12 de agosto. [Consultado:16 de mayo de 2022] Disponible en:

<https://www.youtube.com/watch?v=ZzTLq-Km-UE>

Instituto Nacional Electoral (INE) (2022). Estadísticas Lista Nominal y Padrón Electoral. Disponible en: <https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/> [Consulta: mayo de 2022]

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 2020a. Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario ampliado. Disponible en:

<https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/>

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 2020b. *Encuesta Nacional de Cultura Cívica* (ENCUCI). Disponible en:

[https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encuci/2020/doc/ENCUCI\\_2020\\_Presentacion\\_Ejecutiva.pdf](https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encuci/2020/doc/ENCUCI_2020_Presentacion_Ejecutiva.pdf)

Instituto Nacional Electoral (INE). 2019. Estudio muestral sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2018. Disponible en:

<https://centralectoral.ine.mx/wp-content/uploads/2019/08/EMPC-2018.pdf>

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 2014. Censo de Población y Vivienda 2010. Perfil sociodemográfico de adultos mayores. Disponible en:

[https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod\\_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/perfil\\_socio/adultos/702825056643.pdf](https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/perfil_socio/adultos/702825056643.pdf)

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 2010. Censo de Población y Vivienda 2010. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/>

Kánter, Irma. 2021. Las personas mayores a través de los datos censales de 2020. Senado de la República LXVI Legislatura. Disponible en:

[http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5295/ML\\_204.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5295/ML_204.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Klein, Alejandro. & Ávila-Eggleton, Marcela. 2015. “Ciudadanización y desc ciudadanización de los adultos mayores. El proceso electoral de 2012”, *Sociológica*, vol. 30, núm.86, pp. 131-166. ISSN: 0187-0173. [Consultado: 10 de julio de 2022] Disponible en:

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305041201005>

Méndez, Javier. 2020. Políticas públicas: enfoque estratégico para América Latina. México: FCE

Municipio de Querétaro. n.d. Sistema de Consejos de Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro. [Consultado: 5 de mayo de 2022] Disponible en:

<https://municipiodequeretaro.gob.mx/sistema-de-consejos-de-participacion-ciudadana-del-municipio-de-queretaro/>

Muñoz- Pogossian, B. & Siegel, Adam. 2019. Envejecimiento y derechos humanos: la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Disponible en:

<https://www.cepal.org/es/enfoques/envejecimiento-derechos-humanos-la-convencion-interamericana-la-proteccion-derechos-humanos>

Organización de los Estados Americanos (OEA). Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). 7 a 22 de noviembre de 1969 (Costa Rica).

Organización de los Estados Americanos (OEA). Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. 15 de junio de 2015 (Estados Unidos).

Organización Mundial de la Salud, Grupo Orgánico de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental, Departamento de Prevención de las Enfermedades No Transmisibles y Promoción de la Salud Envejecimiento y Ciclo Vital. (OMS). 2002. “Envejecimiento activo: un marco político”, Rev. Esp. Geriatr. Gerontol., 37(S2), pp. 74-105.

Ramírez-Espinoza, Naayeli. & Cerqueira, Daniel. 2020. Suprema Corte de México ordena al Congreso Legislar sobre consulta indígena. Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). [Consultado: 8 de julio de 2022] Disponible en: <https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/blog-cec/suprema-corte-de-mexico-ordena-al-congreso-legislar-sobre-consulta-indigena>

Secretaría de Bienestar. n.d. Pensión Universal para Personas Adultas Mayores. Gobierno de México.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro (Sistema DIF Querétaro). 2021. Plan Vida: un espacio para el desarrollo integral de las personas adultas mayores. [Consultado 5 de mayo de 2022] Disponible en: <http://sitios1.dif.gob.mx/FamiliaDIF/index.php/queretaro/273>

Vado, Luis. 2020. La agenda gerontológica de la democracia mexicana. Foro jurídico. Disponible en: <https://forojuridico.mx/la-agenda-gerontologica-de-la-democracia-mexicana/>